

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 23
O R D I N A R I A

MARTES 24 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta minutos del martes veinticuatro de febrero de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no asistió a la sesión por encontrarse desempeñando una comisión de carácter oficial.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número veintidós ordinaria, celebrada el lunes veintitrés de febrero del año en curso.

Por unanimidad de nueve votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el martes veinticuatro de febrero de dos mil quince:

I. 492/2013

Contradicción de tesis 492/2013, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver, respectivamente, los amparos en revisión 99/2013 y 397/2012 y el amparo directo 402/2012. En el proyecto formulado por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se propuso: *“PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. SEGUNDO. Ha quedado sin materia la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato; y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. TERCERO. Sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato y el Sexto*

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. CUARTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución. QUINTO. Dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos de los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo vigente.” La tesis a que hace referencia el punto resolutivo cuarto tiene por rubro: *“EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO DEBE IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO QUE NO CUMPLE CON LA CARGA PROCESAL DE LLEVAR A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013.”*

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea realizó la presentación del asunto. Precisó que existen dos puntos de contradicción. El primero, determinar si el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, al imponer al quejoso la carga de cubrir el costo de la publicación del emplazamiento por edictos al tercero perjudicado, viola o no el derecho de gratuidad en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional; el proyecto propone establecer que la contradicción quedó sin materia al haber emitido la Primera Sala la tesis 1a./J. 2/2014 (10a.) de rubro *“EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO*

VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVE LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA GRATUITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.” El segundo, consistente en si el juez de amparo, cuando el quejoso no realiza las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado mediante la publicación de edictos, en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, está obligado o no a apercibir con dictar medidas de apremio, con el fin de que el quejoso cumpla con dicha determinación, en atención a la tesis 2a./J. 108/2010 de rubro *“EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.”*; el proyecto resuelve que debe prevalecer el criterio que se propone en el asunto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto, relativos, respectivamente, a la competencia, a la legitimación, a los criterios contendientes y a la existencia de la contradicción de tesis, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno al considerando quinto, relativo al estudio, en su parte I, alusiva al primer punto de contradicción.

La señora Ministra Luna Ramos coincidió con el primero punto de contradicción precisado en la página treinta y nueve del proyecto, sin embargo, manifestó duda respecto de declararlo sin materia por jurisprudencia emitida por la Primera Sala, puesto que se está resolviendo una contradicción de tesis competencia del Tribunal Pleno, siendo que podría establecerse un criterio obligatorio por parte de este último.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea modificó el proyecto para analizar el tema a partir de las tesis 1a./J. 2/2014 (10a.) de rubro *“EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA GRATUITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.”*, 1a./J. 3/2014 (10a.) de rubro *“EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA*

SUFRAGARLOS.”, y 1a./J. 4/2014 (10a.) de rubro “EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA.”, así como la tesis de la Segunda Sala 2a./J. 108/2010 de rubro “EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.”, que incorpora las excepciones establecidas que se tomarán en cuenta, lo anterior con el fin de evitar posteriores contradicciones entre las Salas.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales recordó que la decisión de la Primera Sala fue posterior a la denuncia de la presente contradicción.

La señora Ministra Luna Ramos coincidió con la propuesta modificada.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando quinto, relativo al estudio, en su parte I, alusiva al primer punto de contradicción, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea, en relación con el considerando quinto, relativo al estudio, en su parte II, alusiva al segundo punto de contradicción, indicó que el proyecto determina que no se deben imponer medidas de apremio al quejoso por no cumplir la carga procesal de llevar a cabo las gestiones necesarias para la publicación de los edictos porque el perjudicado será él mismo, aunado a que, en la teoría general del derecho procesal, de no cumplirse las cargas procesales, a diferencia de los deberes procesales, produce una consecuencia desfavorable en el terreno procesal. Adelantó estar abierto a los ajustes que consideren pertinentes los señores Ministros.

El señor Ministro Pérez Dayán estimó, contrario a lo que propone el proyecto, que si la disposición legal impone al quejoso la obligación de publicar edictos a su costa, el juez, a efecto de cumplir con ese mandamiento, debe aplicar las medidas de apremio para efecto de persuadir a la parte respectiva a que recoja los oficios necesarios y gestione su publicación, en aras de agilizar el procedimiento y atender al artículo 17 constitucional, en la inteligencia de que, si existiera un obstáculo de carácter económico, el Estado, a través del órgano de justicia, lo realice a su costa.

La señora Ministra Luna Ramos recordó que, originalmente, la Segunda Sala sostenía la tesis 2a./J. 64/2002 de rubro *“EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.”*, la cual fue sustituida por la diversa tesis 2a./J. 108/2010 de rubro *“EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.”*, con lo que surgió la discrepancia de criterios con la tesis que se propone en el proyecto.

Consideró que la distinción de la propuesta entre deber procesal y carga procesal es técnica, teórica y doctrinariamente correcta, entendido como que la carga procesal no implica la imposición de una sanción ante el incumplimiento respectivo, lo que sí ocurre con el deber procesal, pudiéndose aplicar los medios de apremio previstos en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada. Discordó con la conclusión del proyecto consistente en que, en el caso, se trata de una carga procesal y, por tanto, su incumplimiento únicamente colocaría al quejoso en una situación de desventaja ante la posibilidad de sobreseerse el amparo por actualizarse una causa de improcedencia, puesto que, precisamente, la

Segunda Sala sustituyó su jurisprudencia al no existir la causa de improcedencia específica al caso de que no se emplace al tercero perjudicado, aun y cuando exista la posibilidad de encuadrarla en la causa de improcedencia genérica, dado que las causas deben estar precisadas en la Constitución Federal o en la propia Ley de Amparo abrogada. Preciso que, en todo caso, ante este incumplimiento, se debería suspender el procedimiento hasta en tanto no se realice la publicación de los edictos, pero resultaría contraproducente en razón de que, si el quejoso resulta beneficiado, esa suspensión quedaría indefinida, además de que no se aplica la caducidad de la instancia en la nueva Ley de Amparo.

Ante ello, propuso que el proyecto sostenga que, ante el incumplimiento de la publicación de los edictos, aunque se trate de una carga procesal, de manera excepcional se aplique una medida de apremio, en aras de evitar el retraso indefinido del procedimiento.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea recapituló que la posibilidad de sobreseer en el juicio subyace en los criterios de ambas Salas, lo que se recoge en el proyecto. Respecto de lo expresado por la señora Ministra Luna Ramos, en cuanto a la suspensión del procedimiento, indicó que tenía razón en cuanto al abuso que podría darse, sin embargo, advirtió que no tendría sentido que el propio quejoso suspendiera el amparo promovido por él mismo, en detrimento de su interés. Por

eso, precisó que existen dos alternativas: primero, que al tratarse de una carga procesal, no se impongan medidas de apremio, asumiendo el quejoso las consecuencias procesales desfavorables y, segundo, que al no existir caducidad, estando interesada la sociedad en no dejar indefinidos los procesos, se impongan medidas de apremio excepcionalmente. Adelantó que se decantaría por la primera opción, en espera de lo que expresen los miembros del Tribunal Pleno.

La señora Ministra Luna Ramos sugirió que se mantuviera la primera parte del proyecto, se quitara lo del sobreseimiento, y se estableciera que, aunque se trate de una carga procesal, tomando en cuenta su naturaleza y las consecuencias que pudiera tener el no establecer medidas de apremio, éstas se aplicarán excepcionalmente para lograr que se cumpla la carga procesal, con independencia de que exista la suspensión.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea modificó el proyecto con la sugerencia realizada.

El señor Ministro Cossío Díaz preguntó qué sucedería con los edictos si la persona requerida no los recoge.

La señora Ministra Luna Ramos advirtió que el juez tendrá la posibilidad de apercibir al requerido con multa o arresto.

El señor Ministro Cossío Díaz cuestionó qué sucedería si no viene al proceso el arrestado.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea señaló que los cuestionamientos del señor Ministro Cossío Díaz son pertinentes, en tanto que la finalidad que se persigue es que los procedimientos no queden suspendidos de facto, indicando que, dada la complejidad de los mismos, no pueden imaginarse todas las particularidades que se presentarán en la realidad.

El señor Ministro Pérez Dayán mencionó que se reconoce la coercitividad como una de las características primordiales del derecho para obtener resultados prácticos, pero que la diferencia entre cargas y deberes procesales que hace el proyecto, a pesar de ser sobresaliente e inteligente, conlleva a un mismo resultado final, esto es, que el juez tendrá que recurrir a los medios de apremio previstos en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles o, en su caso, con los apercibimientos respectivos y que, de resolverse el asunto en sentido contrario, provocaría que el derecho perdiera coercitividad, además de que los procedimientos se estancarían a voluntad de quien quiera aprovecharse de esa situación.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea modificó el proyecto para retomar la propuesta original y eliminar únicamente lo relativo al sobreseimiento, en razón de las dudas expresadas por el señor Ministro Cossío Díaz.

La señora Ministra Luna Ramos indicó que, con la nueva propuesta, se restaría fuerza a las determinaciones del juzgador, indicando que lo referido por el señor Ministro

Cossío Díaz sería un caso extremo porque, finalmente, y como señaló el señor Ministro Pérez Dayán, se prevé la posibilidad de aplicar las medidas de apremio del Código Federal de Procedimientos Civiles. Reiteró la importancia de la distinción doctrinaria entre carga y deber procesales.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea, tras esta intervención de la señora Ministra Luna Ramos, reconsideró la posibilidad de quitar las medidas de apremio y los apercibimientos, puesto que, al no cumplir con el presupuesto procesal de emplazar al tercero perjudicado, se podría actualizar la causa de improcedencia encuadrada en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo abrogada, como se había sostenido jurisprudencialmente.

En ese tenor, retomó la propuesta original del proyecto para efectos de la votación.

La señora Ministra Luna Ramos se apartó de lo relativo al sobreseimiento, puesto que las causales de improcedencia están previstas específicamente en la Ley de Amparo, siendo que la última fracción incluye únicamente las derivadas de la misma ley, siendo que la omisión de señalar el domicilio del tercero perjudicado no está considerada como una causa de improcedencia y sobreseimiento, máxime que muchas tesis de esta Suprema Corte corroboran que dichas causas deben estar previstas en la ley y estar perfectamente probadas.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó a favor del proyecto original puesto que vincula el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo abrogada con su diverso artículo 5°, en el sentido de que la carga procesal radica en el establecimiento de la relación de las partes y que, de no establecerse ésta, tenga la consecuencia del sobreseimiento, como se había estado resolviendo históricamente.

El señor Ministro Franco González Salas concordó con el señor Ministro Cossío Díaz, en el sentido de que los señores Ministros de la Novena Época lidiaron con el mismo problema, por lo que entrelazaron los artículos citados, inclusive el 14 constitucional, para concluir que, para hacer frente a la situación, se actualizaría la causa de improcedencia, al tratarse de una carga procesal y de la obligación de cumplirla. Posteriormente, al advertir una situación inequitativa para aquellos sin capacidad económica, es el porqué de que se introdujera una excepción, para que el gasto lo absorbiera el Poder Judicial de la Federación. Estimó que esa es la mejor forma de resolver, partiendo de la presunción válida de que, quien promovió el amparo, tiene interés en que se resuelva.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea recordó que la Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 16/2000, estimó que, al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de edictos a costa del quejoso para emplazar al tercero perjudicado, se contravenía

el artículo 17 constitucional, lo cual era atribuible al quejoso, cuyo interés no podía estar encima del público, por lo que se determinaba el sobreseimiento, en atención al artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo abrogada, en relación con sus diversos 30, fracción II, y 5º, fracción III, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena coincidió con la propuesta original, pues el punto a dilucidar es la consecuencia jurídica del incumplimiento de la carga procesal en estudio, en la inteligencia de que esta Suprema Corte, reiteradamente, se ha inclinado por el sobreseimiento.

El señor Ministro Pérez Dayán puntualizó que los tribunales contendientes discreparon en cuanto a si es posible sobreseer sin haber prevenido, no así respecto de si el juez esta frente a una carga o deber procesales ni de su facultad para imponer una medida de apremio, tal y como se describe en la página treinta del proyecto.

El señor Ministro Cossío Díaz coincidió en el contenido de la página treinta del proyecto, sin embargo, aclaró que nada impide a esta Suprema Corte el precisar la naturaleza procesal de esa condición, pues no tiene por qué avenirse rigurosa y estrictamente a la contención de los órganos en la particularidad de sus casos.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea suscribió la intervención del señor Ministro Cossío Díaz, dado que esta Suprema Corte no está atada a elegir uno de

los criterios en contención, sino que puede establecer una solución distinta, sea por una dogmática o por un análisis distintos.

El señor Ministro Pérez Dayán confirmó que el Tribunal Pleno puede proponer una solución distinta, pero que ahora la solución ha generado dudas, incluso al señor Ministro ponente, de quien refirió que su criterio ha sido que las causas de improcedencia y sobreseimiento son realmente excepcionales, sosteniendo que sólo debe atenderse a las que derivan de la Constitución, siendo que su propuesta actual apela a una causa que no está contenida en la ley.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales recapituló que la jurisprudencia inicial de la Segunda Sala señalaba que, ante el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos, se debía sobreseer en el juicio y que, posteriormente, la sustituyó para agregar la circunstancia de que el quejoso no tuviera las condiciones económicas suficientes para pagar el edicto, siendo entonces que correría el gasto a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, pero se mantuvo el sobreseimiento como regla general, con lo cual, en su momento, había votado, considerando este criterio como vigente y válido, pues se impediría el cumplimiento del artículo 17 constitucional respecto de la impartición de justicia, ya que no sólo se afectaría al quejoso sino al tercero perjudicado como parte de la relación procesal. En esos términos, se pronunció en favor del proyecto.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que la sustitución de la jurisprudencia de la Segunda Sala no derivó de analizar si debía sobreseerse o no, sino respecto de quién debería pagar los edictos ante la insuficiencia económica del quejoso. Estimó que la causa de improcedencia no está prevista en la Constitución ni en la Ley de Amparo, a pesar de que los artículos 73 de la Ley de Amparo anterior y 61 de la Ley de Amparo vigente, en sus últimas fracciones, se abra cierta posibilidad para ello. Por eso, reiteró su voto favorable por la primera parte del proyecto, apartándose de lo respectivo al sobreseimiento.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de lo expresado por el señor Ministro Pérez Dayán, recordó que su criterio en cuanto a las causas de improcedencia consiste en que sólo la Constitución puede excluir del control constitucional de amparo un determinado tipo de actos de autoridad y, por ende, las causas de la Ley de Amparo sólo pueden repetir las causas constitucionales o aquéllas que deriven de la técnica y teleología del amparo, al tenor de los artículos 103 y 107 constitucionales, por lo que no incurre, con la propuesta del proyecto, en contradicción alguna.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando quinto, relativo al estudio, en su parte II, alusiva al segundo punto de contradicción, la cual se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz,

Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Aguilar Morales. La señora Ministra Luna Ramos votó parcialmente a favor de la primera parte (diferencia doctrinaria entre cargas y deberes procesales) y en contra de la segunda (del apercibimiento y sobreseimiento). El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra. Los señores Ministros Cossío Díaz y Presidente Aguilar Morales reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. La señora Ministra Luna Ramos reservó su derecho de formular voto particular respecto de la parte en que votó en contra.

Por tanto, dadas las votaciones alcanzadas, los puntos resolutivos que regirán el presente asunto deberán indicar:

“PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. SEGUNDO. Sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. TERCERO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, los criterios sustentados por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en esta resolución. CUARTO. Dese publicidad a

las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resolución, en términos de los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo vigente.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la sesión pública ordinaria que se celebrará el jueves veintiséis de febrero de dos mil quince, a las once horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.